

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACION - SENTENCIA	
DEMANDANTE	GUILLERMO DE JESÚS MEJIA BOLIVAR
DEMANDADO	PORVENIR S.A. MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. (llamada en garantía)
RADICADO	05001-31-05-017-2017-00432-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Nulidad de dictamen de PCL - Pensión de invalidez de origen común.
DECISIÓN	Revoca y Confirma

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria

de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **GUILLERMO DE JESÚS MEJIA BOLIVAR** en contra de la **AFP PORVENIR S.A.**, y dentro del cual se ordenó integrar como llamada en garantía a **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 017**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de septiembre de 2019.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: El señor GUILLERMO DE JESÚS MEJÍA BOLIVAR se encuentra afiliado en pensiones a PORVENIR S.A. y, padece las enfermedades *“desplazamiento de disco intervertebral, hipoestesia en área lateral del muslo izquierdo, disminución de la fuerza muscular, limitación funcional para la marcha, dolor lumbar crónico y depresión y ansiedad”*.

Refirió que PORVENIR S.A., a través de la aseguradora, calificó su pérdida de capacidad laboral en un 33,70%, estructurada el 20 de febrero de 2011; dictamen que considera desconocedor de su real estado de salud, al no habersele supuestamente realizado exámenes diagnósticos especializados, desconocimientos de sus patologías progresivas y omisión de algunos cuadros clínicos relevantes.

Se duele de no estar percibiendo la pensión de invalidez, cuando dice tener la condición de inválido y las semanas legalmente exigidas para acceder a dicha prestación económica.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se condene a PORVENIR S.A., al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 20 de febrero de 2011, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo la accionada a dar respuesta a la misma por intermedio de apoderada judicial (fls. 61 y ss).

A través del escrito de contestación, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; frente a los hechos, aceptó la afiliación del actor, la calificación que se le realizó a través de la aseguradora y las enfermedades padecidas, argumentando que Seguros de Vida Alfa SA lo calificó integralmente, a través de un grupo interdisciplinario, sin que se hubiere interpuesto ningún recurso en contra del dictamen, el cual se encuentra en firme.

Formuló las siguientes excepciones de fondo: Falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, compensación y prescripción.

Llamamiento en garantía:

PORVENIR S.A. procedió a hacer llamamiento en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., invocando efectividad de póliza previsional.

Dicho llamamiento fue aceptado por el juzgado de primera instancia, y se notificó debidamente a dicha compañía aseguradora.

Respuesta de MAPFRE SEGUROS VIDA COLOMBIA S.A.:

Dicha respuesta obra a folios 149 a 169 del expediente. A través de la misma, si bien admitió la existencia de un contrato de seguro con PORVENIR S.A., expresó que no le constan los hechos invocados en la demanda; adujo que no existe mérito suficiente para que sean acogidas las pretensiones de la demanda, en tanto el actor no cuenta con el porcentaje mínimo del 50% de pérdida de capacidad laboral para que pueda acceder a la pensión de invalidez.

Formuló las excepciones en contra de las pretensiones del actor, las de *“AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR, UNA PETICIÓN ANTES DE TIEMPO Y LA INEXISTENCIA DE UN CONFLICTO ENTRE LAS PARTES, AUSENCIA DE CAUSA PETENDI, COMPENSACIÓN Y/O PAGO, INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE PORVENIR S.A., AUSENCIA DE REQUISITOS PARA LA PENSIÓN, IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS Y PRESCRIPCIÓN”*.

Frente al llamamiento en garantía, propuso las excepciones de *“AUSENCIA DE COBERTURA e IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 10 de septiembre de 2019, la Juez de conocimiento dejó sin efectos el dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 2875479 del 5 de enero de 2017, proferido por Seguros Alfa SA, para en su lugar darle validez al dictamen del 26 de marzo de 2019 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, por medio del cual se dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 59,79%, con fecha de estructuración 11 de septiembre de 2018, teniendo por invalido y beneficiario de la pensión de invalidez al señor GUILLERMO DE JESÚS MEJÍA BOLIVAR.

Condenó a PORVENIR S.A. a pagar al demandante la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, sobre una mesada pensional por valor de salario mínimo legal mensual vigente, sobre 13 mesadas al año, reconociendo en su favor un retroactivo pensional por valor de **\$10.270.724**, causado entre el 11 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, sobre el cual ordenó la indexación, autorizando a PORVENIR S.A. descontar los valores correspondientes al sistema de salud y facultándole a realizar los descuentos por incapacidades médicas que eventualmente se pueda verificar que le fueron pagadas al trabajador. Absolvió por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, condenó en costas procesales a PORVENIR S.A. en favor del demandante, y fijó como honorarios definitivos en favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la suma de \$600.000.

Como fundamentos de la decisión, encontró suficientemente justificado y sustentado el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, realizado el 26 de marzo de 2019 (fls. 216/218), en el cual se tuvo en cuenta todas las patologías padecidas por el actor y no valoradas integralmente en el dictamen realizado el 5 de enero de 2017 por Seguros de vida Alfa SA (fls. 9/12).

Precisó que el hecho que el dictamen de Seguros de Vida Alfa SA se encontrara en firme, no constituía impedimento para que la jurisdicción se pronunciara sobre la validez de dicho dictamen.

Para la operadora jurídica de primer grado, el Dr. Héctor Orlando Agudelo Flórez –Perito Calificado de la Junta Regional- rindió una clara, concisa y cabal sustentación del dictamen realizado, merced a lo cual explicó correctamente las deficiencias asignadas al demandante, con el detalle suficiente de las enfermedades de carácter crónico que se fueron agravando en el tiempo y que llevaron a determinar que para el 11 de septiembre de 2018 sí se configuraba el estado de invalidez.

Tomó dicha fecha de estructuración, y al advertir que en los 3 años anteriores a dicha fecha reunía más de 50 semanas cotizadas, ordenó el pago de la pensión de invalidez desde dicha fecha.

VI. – APELACION

La sentencia de primera instancia fue apelada por la apoderada judicial de PORVENIR S.A., quien solicitó la revocatoria de dicha sentencia y, absolver a la entidad del pago de la pensión de sobrevivientes.

Lo sustentó argumentando la validez del dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado el 5 de enero de 2017 por SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., que arrojó una pérdida de capacidad laboral del 33,70%, estructurada el 20 de febrero de 2011. Indicó que este dictamen es legal, al haber sido realizado por un grupo interdisciplinario y no haberse presentado objeción alguna por el demandante, quedando en firme el mismo.

Adujo respecto al dictamen practicado en el curso del proceso de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que no desconoce que puedan existir nuevas patologías generadas a partir del transcurso del tiempo, pero que dichas enfermedades no fueron reportadas para el momento de la calificación realizada por ALFA S.A.

Se duele que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia incurrió en imprecisiones en la cuantificación y determinación de las deficiencias, concretamente en el trastorno depresivo, la patología del hombro derecho y la agudeza visual, las cuales no fueron explícitas a partir del tratamiento y manejo médico que se habría dado, quedando ausentes de una puntualidad en cuanto a las secuelas.

No estuvo de acuerdo con la condena al retroactivo debidamente indexado, y al efecto argumentó que no es procedente dicha indexación teniendo en cuenta que los dineros que se encuentran en la cuenta de ahorro individual del asegurado han generado los respectivos rendimientos, además que, al tratarse de una pensión reconocida por valor del salario mínimo, dicha cuantía dispone de un mecanismo propio de actualización año a año, que mantendría esas sumas actualizadas a valor presente.

De otro lado, también apeló el numeral 8º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, al estimar improcedente la fijación de gastos adicionales al pago del dictamen rendido por la Junta, destinados a pagar la sustentación del perito evaluador. Agregó que, esta suma es injustificada, en tanto a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia ya se le habían pagado los gastos del dictamen realizado, y son dineros que ni siquiera han sido solicitados por dicho organismo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En la oportunidad procesal, el apoderado judicial de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. presentó alegatos de conclusión, expresando que comparte la decisión de la A quo de haber exonerado de cualquier responsabilidad a esta compañía; decisión que estima, debe mantenerse.

Expuso razones de falta de cobertura de la respectiva póliza, lo que haría impertinente el cubrimiento de riesgo alguna de invalidez, y subrayó el hecho de que el demandante nunca manifestó inconformismo con el dictamen de calificación que le fue realizado.

Por su parte, la apoderada judicial de PORVENIR S.A. presentó alegatos de conclusión ante esta ponente, a través de los cuales expresó su inconformismo con la sentencia de primera instancia, la cual solicitó ser revocada.

Argumentó las razones por las cuales estima válido el dictamen realizado al actor por la aseguradora, expresando que el mismo tuvo en cuenta las enfermedades que existían para la fecha de la calificación; reiteró lo sustentado en la apelación, en sentido que consideran que el dictamen de la Junta Regional que acogió la juez, presente inconsistencias en el tema de las deficiencias, al no existir un diagnóstico sobre las secuelas ni permite llegar a una conclusión de pérdida de capacidad laboral definitiva.

Expresó inconformismo sobre la indexación que se impuso pagar, y reiteró que la cuenta de ahorro individual del actor generó unos rendimientos financieros.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de invalidez de origen común, nulidad de dictamen de pérdida de capacidad laboral, indexación.

En atención a los argumentos esgrimidos por la apelante, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia consisten en determinar: **(i)** si el señor GUILLERMO DE JESÚS MEJÍA BOLIVAR logró o no, acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, pese a que fue calificado en su oportunidad por la aseguradora adscrita a su fondo de pensiones, estableciendo un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al 50% de pérdida de capacidad laboral; **ii)** tal determinación se realizará estableciendo si el mencionado dictamen alcanzó a ser o no desvirtuado por el que se practicó al interior del proceso por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y si existieron patologías que no fueron tenidas en cuenta en la primera calificación, y que por su carácter progresivo habrían configurado una pérdida de capacidad laboral en el asegurado superior al 50%; **iii)** una vez resuelto lo anterior, y en el evento de existirle derecho a la prestación, se solucionará el cargo planteado en la alzada por la recurrente, en contra de la indexación sobre el retroactivo pensional y de los honorarios adicionales fijados en favor del perito, por la sustentación oral del dictamen llevada a cabo en la audiencia de trámite y juzgamiento.

El artículo 38 de la ley 100 de 1993 señala que se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

El estado de invalidez es una condición física o mental que impide a la persona desarrollar una actividad laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus capacidades físicas y/o psíquicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir por sí mismo una vida digna, en resumen es la pérdida de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten desempeñarse en una actividad u oficio habitual, según lo establecido en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.

El artículo 1º de la Ley 860 de 2003, modificatorio de la Ley 100 de 1993, establece en lo pertinente al caso:

“ARTÍCULO 1º. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:

Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. *Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración...*”.

En el caso bajo estudio, es preciso recordar que el demandante, como se observa a folios 9 a 12 del expediente, fue calificado por Seguros de Vida ALFA S.A., el 5 de enero de 2017, con 33,70% de pérdida de capacidad laboral, derivada de una enfermedad de ORIGEN COMUN, estructurada el 20 de febrero de 2011, con diagnóstico de *“discopatía lumbar multinivel hernia discal lumbar L5 S1, sin más deficiencias calificables, con capacidades motoras e intelectuales indemnes...*”.

En el curso del proceso, la juez de primera instancia decretó la calificación del señor GUILLERMO DE JESÚS MEJÍA BOLIVAR y designó a la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia la realización de la valoración, la cual fue llevada a cabo el 26 de marzo de 2019, y obra a folios 216 a 218 del

expediente. Dicho dictamen solo mantuvo, del realizado por SEGUROS ALFA S.A. en enero de 2017, el origen común de la pérdida de capacidad laboral, ya que arrojó un porcentaje de pérdida de capacidad superior al inicialmente reportado por la mencionada aseguradora (**aumentando del 33,70% al 59,79%**), y varió la fecha de estructuración de invalidez, pasando de **20 de febrero de 2011 al 11 de septiembre de 2018**. Ambos se efectuaron bajo la misma normativa, el Decreto 1507 de 2014.

En el caso concreto, resulta de relevancia destacar que el aspecto objetivo de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, esto es, la densidad de semanas exigidas para acceder al derecho, consistente en acreditar un mínimo de cincuenta (50) semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, no ofrece ninguna duda y el mismo se encuentra satisfecho, sea que se tome la fecha de estructuración certificada por SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. (20 de febrero de 2011), o sea que se tome en cuenta la determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez (11 de septiembre de 2018).

Ello por cuanto, el actor cuenta con una amplia densidad de cotizaciones, reflejadas en su historia laboral visible a folios 82 y siguientes del expediente, encontrándose afiliado de manera continua a PORVENIR S.A. desde el año 1995 y con el sostenimiento de una relación laboral con SOTRAMES S.A. desde diciembre de 2009, y otros empleadores en el pasado.

Conforme a lo anterior, el debate se circunscribe a resolver si hay mérito para declarar invalido el dictamen realizado por SEGUROS DE VIDA ALFA al establecer porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 33,70%, y si, conforme a la real condición médica del señor MEJÍA BOLIVAR, hay lugar o no a acoger –como lo hizo la A quo- el dictamen practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que lo certificó como inválido.

Para estos efectos, es pertinente hacer a un lado, de entrada, la consideración que plantea en la sustentación de la alzada la apoderada judicial de PORVENIR S.A., cuando pretende que se revoque la sentencia de primera instancia, por el solo hecho de que el asegurado no recurrió el dictamen

realizado por SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., insistiendo en que la firmeza del mismo haría imposible llevar a cabo un debate judicial donde se determine su invalidez.

No puede perderse de vista que, en cuanto a los dictámenes periciales, ha sido criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, que los mismos no son prueba solemne, ni actos administrativos¹.

El artículo 44 del Decreto 1352 de 2013, preceptúa que *“las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente”*.

Teniendo claro lo anterior, es pertinente revisar los inconformismos que la apoderada judicial de PORVENIR S.A. le enrostra a la sentencia de primera instancia, al haber tenido en cuenta el dictamen rendido por la Junta Regional

¹ En la sentencia radicada con el número 35.450 del 18 de septiembre de 2012 – Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se dejó sentado que:

“...Se ha de advertir en primer término, que la jurisprudencia de la Corte tiene establecido el criterio de que los dictámenes de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez, no son pruebas solemnes y por lo tanto, el juzgador respecto de ellos no está sometido a la tarifa legal de prueba. En consecuencia, como prueba pericial que es, queda sometida a la libre apreciación del juez.

De la misma manera tiene señalado la Corporación, que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de invalidez no obliga al juzgador y que si para definir una determinada controversia se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles uno rendido por la junta regional y otro por la nacional, podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad analizado dentro del conjunto de elementos probatorios con los que cuente, pudiendo también optar si lo considera menester, por ordenar un tercer dictamen todo dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ha de aclararse que el juez no debe perder de vista, que en todo caso, la pérdida de capacidad laboral solo puede establecerse con base en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, por lo cual, aunque el artículo 61 del CPTSS, establece que el juez puede apreciar libremente las pruebas obrantes en el proceso, es indispensable contar con el correspondiente apoyo de medios técnico-científicos ajustados al Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, para fundamentar una decisión judicial sobre el porcentaje, el origen y la estructuración de la pérdida de capacidad laboral de una persona.

Lo cual resulta apenas lógico, puesto que en materias que atañen a la ciencia médica, no debe el juez emitir juicios que no estén sustentados en conceptos profesionales de expertos en la materia.

De conformidad al inciso 2° del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, “corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias”.

Y a reglón seguido continúa estableciendo dicha disposición, que *“en caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”*.

de Calificación de Invalidez de Antioquia, y haber declarado nulo el de Seguros Alfa SA.

Sea lo primero, reseñar que ambos dictámenes guardan una relativa cercanía en su elaboración, en tanto el de Seguros de Vida Alfa se realizó en enero de 2017 y el de la Junta Regional de Calificación de Invalidez se practicó en marzo de 2019.

Al revisar las patologías que valoró la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, se puede evidenciar que la tasación que llevó a cabo Seguros de Vida Alfa SA. no tuvo en cuenta patologías crónicas, determinantes y progresivas, debidamente sustentadas en historia clínica, que debieron haber sido incluidas; circunstancia que explica la diferencia entre los porcentajes de pérdida de capacidad laboral del 33,70% obtenido en la primera calificación, y el del 59,79% de la segunda.

Ahora, se advierte, que de conformidad con el artículo 3º del Decreto 1507 de 2014, la condición de salud que tuvo en cuenta la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia incluyó correctamente las categorías de enfermedad crónica, trastorno, traumatismo y lesión, conforme pasa a detallarse:

El dictamen de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., principalmente partió de la enfermedad PROTESIÓN DISCAL SUBARTICULAR DERECHA L4 L5 que comprime raíz de L5; CAMBIOS OSTOCONDROTICOS y OSTEOSARTROSICOS FACETARIOS, HEMANGIOMA DE L1, ESTRECHEZ LEVE DEL FORAMEN RADICULAR DERECHO L4 L5, APARENTE ESPONDILOLISIS L5 y QUISTES PERI NEURALES SACROS.

Merced a esa consideración clínica, acudió a la aplicación de la tabla 15,3 del baremo, estableciendo la deficiencia en 26%, resultante de *“Deficiencias por alteración de la columna lumbar”*.

Procedió a calificar las restricciones del rol laboral en 15%, las restricciones de autosuficiencia económica en 1% y las restricciones en función de la edad cronológica en un 18%.

No obstante, esta sala, tal y como también lo hizo la juez de primera instancia, procedió de manera detallada a hacer un análisis de la historia clínica del demandante, obrante a lo largo del expediente en distintas piezas documentales, y compendiada en medio magnético de folio 40 del plenario, y, con apoyo en la sustentación del dictamen rendida por el médico valorador de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, Dr. Héctor Orlando Agudelo Flórez, quien asistió a sustentar su ponencia valorativa a la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el 10 de septiembre de 2019 en el juzgado de primera instancia, encuentra lo siguiente:

Existen varios cuadros clínicos, con palmaria incidencia en el porcentaje de deficiencias, que forman el convencimiento de la jurisdicción, entendiéndose para todos los efectos legales que el señor GUILLERMO DE JESÚS MEJÍA BOLIVAR tiene un porcentaje superior de pérdida de capacidad laboral al 50% y, por ende, es invalido, como lo certificó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

La deficiencia del miembro superior del actor constituye un diagnóstico relevante con incidencia en su pérdida de capacidad laboral, y no fue tomada en cuenta por SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, a efectos de incluir esta dolencia, no se quedó solo con el proceso de anamnesis generado a partir de la propia declaración rendida por el paciente, sino que partiendo del diagnóstico debidamente documentado en la historia clínica procedió a hacer valoración por ortopedia para concluir en la inclusión.

Lo propio ocurrió con el problema de pérdida de la agudeza visual del señor MEJÍA BOLIVAR, que se incluyó a partir de su certera existencia en el diagnóstico y la actualización de la valoración por oftalmología.

En el caso de la DIABETES MELLITUS, son acertadas las consideraciones de la juez de primer grado, respecto a la identificación del tratamiento de la enfermedad con tiempo ampliamente anterior a la calificación realizada por SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., la inclusión del paciente en un programa para su tratamiento y la amplia certificación en la historia clínica.

No puede pasarse por alto las deficiencias generadas por el trastorno del humor, que, tal y como lo sustentó el médico valorador con suficiente sustento científico, de diagnóstico y de tratamiento, es evidente y sustentable científicamente.

Es importante incluso mencionar, que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia se abstuvo de incluir en la valoración el problema de DEDO EN GATILLO MANO DERECHA, argumentando que se trataba de una enfermedad con antecedente de ser de carácter laboral, y que no resultaba pertinente incluirla en una valoración por dolencias comunes.

Conforme a lo anterior, esta sala encuentra plenamente justificada y acertada la conclusión a la que llegó la juez de primer grado, al acoger el dictamen médico de la Junta regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, por lo que es acertada la decisión de haber reconocido la pensión de invalidez al demandante, a partir de la estructuración de su invalidez 11 de septiembre de 2018.

Ahora, los argumentos presentados por la apoderada judicial de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada no alcanzan a derruir esa conclusión, ya que se argumenta por dicha apoderada que la calificación de SEGUROS ALFA S.A. es válida por haber omitidos esas enfermedades, al no haberse configurado para el momento de la valoración. Ello no es de recibo, ya que no es del todo cierto.

Si se revisa por ejemplo la enfermedad de la diabetes, se evidencia el diagnóstico y el adelantamiento del tratamiento pertinente, lo cual sumado al carácter progresivo y crónico de la misma, permite concluir que SEGUROS DE

VIDA ALFA S.A. sí tenía los elementos clínicos suficientes para haber llegado a otra conclusión en cuanto al porcentaje de pérdida.

Tampoco le asiste razón a la apoderada judicial de PORVENIR S.A., cuando hace ver que no hay mérito para que se aumente el porcentaje de deficiencias, argumentando ausencia de manejo y tratamiento frente a las referidas enfermedades y justificando a partir de dicha ausencia la no inclusión por parte de SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.

Ello no es tal, y contrario a esa manifestación, en las mencionadas piezas de la historia clínica puede advertirse la severidad de los diagnósticos y el manejo clínico que se le ha dado a dichas dolencias.

En síntesis, los argumentos de la apoderada judicial de PORVENIR S.A. resultan insuficientes para revocar la declarada nulidad del dictamen emitido por SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.

Es el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el que denota el verdadero estado de invalidez del actor, y que comprende la calificación integral e interdisciplinario de su condición clínica.

En consecuencia, **se confirmará** la decisión de haber reconocido la pensión de invalidez al señor GUILLERMO DE JESÚS MEJIA BOLIVAR, desde la fecha de estructuración de su invalidez.

Ahora, los argumentos que presentó la recurrente en su recurso de apelación, subsidiarios al hecho del reconocimiento del retroactivo pensional, conforme a los cuales aduce que el hecho de que el monto de la pensión mensual equivalga al salario mínimo legal mensual vigente se erigiría en razón para revocar la condena a la indexación del retroactivo al momento del pago, no tienen ningún fundamento suficiente para acceder a tal revocatoria.

En efecto, una cosa es el monto de la mesada pensional para cada uno de los años subsiguientes al 2018, que en este caso ascienden al salario mínimo y, otra muy distinta es que se desconozca que las sumas que han debido pagarse periódicamente en las correspondientes mensualidades

conforme se han ido causando, no se han cancelado en este momento, escenario de retardo en el que se hace imperiosa la actualización monetaria, ya que se trata de sumas depreciadas económicamente.

De esta manera, esta sala mantendrá la orden de la indexación sobre el retroactivo reclamado.

En lo que sí le asiste razón a la apoderada judicial recurrente, es en la condena a honorarios adicionales a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia a que condenó la A quo en el numeral 8º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, ya que los mismos no tienen ningún sustento legal, y desconocen el hecho de que los honorarios a la junta ya fueron debidamente pagados.

En consecuencia, se **revocará** el numeral 8º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, por haber impuesto a PORVENIR S.A. el pago de \$600.000 por tal concepto, para en su lugar **ABSOLVER** a dicha entidad de dicho pago.

Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad parcial del recurso de apelación interpuesto.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral 8º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación, por haber condenado a **PORVENIR S.A.** a pagar la suma de \$600.000 a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, para en su lugar **ABSOLVER** a **PORVENIR S.A.** de dicho pago, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.


SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

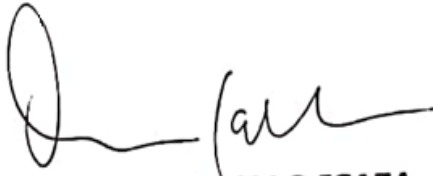
TERCERO: ABSTENERSE de imponer condena en costas procesales de segunda instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.


CUARTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 054 del 5 de abril de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>